

1266-3/6
**PARTIDO COMUNISTA OBRERO
ESPAÑOL**

**LA ACCION UNIDA DE LA
CLASE OBRERA, FUERZA
DECISIVA PARA EL CAM-
BIO DEMOCRATICO Y
REVOLUCIONARIO EN
ESPAÑA**

IV PLENO DEL COMITE CENTRAL

401

Archivo Histórico



112.09.316

INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO AL IV PLENARIO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCOE



presentado por el camarada Enrique LISTER, Secretario general.

Camaradas:

Desde el III Pleno del Comité Central del PCOE, celebrado en noviembre de 1974, hasta el presente Pleno ha transcurrido un largo periodo rico en acontecimientos, entre los que destacan la muerte del dictador Franco y la desaparición de su onímodo poder personal, el establecimiento de la monarquía continuista de Juan Carlos y, sobre todo, el inicio de una nueva etapa en el movimiento político y social de España; etapa que se caracteriza por un auge de la acción de las masas trabajadoras y sectores democráticos por las libertades políticas y derechos cívicos, sin precedentes en la llamada «era de Franco». En la sociedad española no hay un estrato social que no se vea conmocionado por esta nueva situación y no se ponga en movimiento para defender sus intereses políticos, económicos y sociales.

Los grandes problemas de la etapa crucial que estamos viviendo, en la que está inmerso el Partido Comunista Obrero Español, son objeto del más atento examen por el Comité Ejecutivo, en cuyo nombre someto a vuestra consideración, camaradas miembros del Comité Central, el presente informe.

Una serie de causas de orden material y organizativo han impedido reunir el Comité Central en el plazo prescrito por los Estatutos. No obstante, el Comité Ejecutivo se ha cuidado de tener informados a los miembros del Comité Central de los distintos aspectos de la actividad del Partido, y de conocer sus opiniones sobre los principales problemas políticos abordados en el periodo que examinamos, a través de cartas, contactos personales y reuniones ampliadas del Comité Ejecutivo.

Con mayor o menor fortuna, el Comité Ejecutivo ha hecho lo

que ha estado a su alcance por aplicar la línea política general señalada por el Congreso Extraordinario y las resoluciones de los plenos del Comité Central.

Al hacer un análisis retrospectivo de la actividad del Partido en el periodo que media entre el III y el IV Pleno del Comité Central, nuestro Comité Ejecutivo ha llegado a las dos conclusiones siguientes:

La primera, que los hechos acaecidos han confirmado íntegramente los postulados fundamentales de la política del PCOE, a saber:

—la desaparición física del dictador no podía conllevar automáticamente al desmoronamiento de las estructuras del sistema socio-político creado por el franquismo.

—no había una contradicción de principio entre el franquismo, como régimen político, y la burguesía monopolista española.

—la monarquía juancarlista, como la forma del continuismo franquista, respondía a las necesidades de clase de las oligarquías españolas y del imperialismo, especialmente del norteamericano.

—el Ejército continuaría siendo, en lo fundamental, el instrumento de garantía y mantenimiento de las estructuras socio-políticas e instituciones franquistas.

—la Iglesia española, como institución encargada de cumplir una función social y política, no se pondría resueltamente del lado de la democracia, sino que seguiría apoyando a las clases dominantes.

—con la muerte del dictador desaparecería del franquismo sólo el poder personal de Franco, y la monarquía estaría incapacitada para promover reformas que afectaran a la intangibilidad del régimen.

—el verdadero cambio democrático en España no podría producirse en base a componendas con sectores de la llamada «clase política» y sus equipos de gobierno, sino a través de un poderoso movimiento de masas, encabezado por la clase obrera, capaz de satisfacer las reivindicaciones más urgentes de éstas y de implantar la República democrática, secular aspiración del pueblo español.

La segunda, que la política correcta del Partido Comunista Obrero Español, la creciente actividad de sus organizaciones y el espíritu combativo y revolucionario de sus militantes han hecho que el PCOE se convierta en una fuerza política en el plano nacional, reconocida por el movimiento obrero y democrático español, y del cual se ve obligada a hablar incluso la prensa burguesa.

PROSIGUE LA CRISIS ECONOMICA DEL CAPITALISMO

ME vais a permitir que me detenga a examinar la crisis que sufre el mundo capitalista y algunos problemas relacionados con ella por la incidencia que tienen en la vida económica y política de España.

Hace ya más de un lustro que con ciertas intermitencias y altibajos, pero siempre en crescendo, el mundo capitalista se ve azotado por la más grave crisis del periodo de posguerra. Esta afecta tanto a la base económica del capitalismo como a todo el sistema de relaciones sociales y políticas de éste.

La crisis estalla, como se sabe, en la tercera etapa de la crisis general del capitalismo y en las condiciones de la confrontación entre el capitalismo y el socialismo, cada día más favorable a este último. La nueva crisis es el exponente más claro de cómo se profundizan las contradicciones irreconciliables del capitalismo. Las fuerzas productivas, que se desarrollan a influjo de la revolución científico-técnica, chocan con las relaciones de producción basadas en la explotación del trabajo asalariado.

La crisis es exponente asimismo del desenfreno de las formas más agudas de la espontaneidad capitalista, y por ende de la anarquía de la producción, así como de la inconsistencia de la tan jaleada por los ideólogos burgueses «regulación monopolista-esta'l» de la economía capitalista.

En el marco de cada país capitalista son factor permanente de deformación de la economía nacional los grupos financieros e industriales, que poseen un poder económico inconmesurable, obtienen beneficios fabulosos y, a la vez, reciben del erario público subvenciones por valor de miles de millones con el pretexto del apoyo a la producción. En el plano internacional son también un serio factor de destabilización de la economía capitalista mundial las sociedades multinacionales, que controlan más de una tercera parte del producto bruto del mundo capitalista y nueve décimas partes del total de las inversiones. Para unos y para otras, la insaciable sed de los beneficios máximos es la razón de su actividad y de su propia existencia.

Desde la terminación de la segunda guerra mundial hasta finales de los años 60, el ciclo capitalista mundial venía distinguiéndose por falta de sincronización entre los países capitalistas. Mientras en unos la producción crecía lentamente o se mantenía, poco más o menos, estancada, como, por ejemplo, en EE.UU. e Inglaterra, en otros países surgían los llamados «milagros económicos», como en el Japón y Alemania occidental.

En países de desarrollo capitalista medio, como es el caso de España, el «despegue económico» se produjo al calor de una coyuntura económica favorable en la Europa de los monopolios.

Sin embargo, la situación se caracteriza hoy en que todos los países capitalistas sin excepción se encuentran afectados por la crisis económica, aunque con cadencias distintas y diferencias en el tiempo. De ahí que la presente crisis tenga mucho de semejanza con la de comienzos de los años 30. Esta sincronización del ciclo mundial hace mucho más difícil la salida de la actual crisis y niega, al mismo tiempo, las fábulas de los economistas burgueses acerca de la posibilidad de superar las crisis bajo el capitalismo.

Pese a dicha sincronización de las convulsiones económicas, la crisis tiene características específicas en cada país. Por ejemplo, en Italia la crisis económica es la motivación principal de la honda crisis política que atraviesa actualmente el país; en cambio, en España la crisis económica ha venido a ensamblarse con la endémica crisis política del régimen franquista, que alcanza sus cotas más elevadas bajo el continuismo de la monarquía juancarlista.

Los signos distintivos generales de la actual crisis son el descenso de la producción y, por tanto, la no utilización completa del potencial industrial —que en algunos países capitalistas llega a un tercio de la capacidad total productiva—; el aumento del paro, cifrado en quince millones para los países capitalistas desarrollados, y la recesión de todas las esferas de la economía; crisis que se ha entrelazado con la crisis monetaria, energética y de materias primas. Estos procesos se ven fuertemente agravados por una inflación galopante, que era típica sólo en los tiempos de guerra o en los periodos posbélicos de desbarajuste económico.

La inflación se ve estimulada por los exorbitantes presupuestos de guerra de los Estados capitalistas y crece anualmente en algunos de ellos en más del 20%, lo que lleva a un incremento constante del costo de la vida y, por consiguiente, a una reducción del poder adquisitivo de las masas.

Pero los exorbitantes presupuestos de guerra de los Estados ca-

pitalistas no sólo estimulan la inflación, —azote de la sociedad capitalista moderna para las masas laboriosas sino que espoléan la carrera armamentista, tanto en cuanto a las armas convencionales como a las estratégicas de gigantesco poder destructivo.

Los progresos logrados por la distensión internacional, por la política de paz de los Estados socialistas, y en primer lugar de la URSS, la misma coexistencia pacífica en las relaciones entre Estados con diferentes regímenes socioeconómicos —cuya expresión más destacada fue la Conferencia de Helsinki—, se ven amenazados actualmente por la carrera armamentista impuesta al mundo por EE. UU. Su actual presupuesto de guerra alcanza una cifra récord en la historia de este país. La paz se ve amenazada también por todos aquéllos que tratan de provocar una nueva ola de tensión mundial y de arrojar a la Humanidad en los brazos de la «guerra fría», entre los que se distinguen los militaristas y revanchistas germano-occidentales.

Ello representa un gravísimo peligro para la paz, para todos los pueblos y Estados, de que debe ser consciente, ante todo, la clase obrera. De ahí que sea indispensable la vigilancia de los pueblos y partidos revolucionarios frente a la agresividad del imperialismo y necesaria la creación de un combativo frente antiimperialista, especialmente hoy cuando el sistema capitalista se ve afectado por una aguda crisis económica, de la cual pretenderá salir a cualquier precio.

Prosigamos. En las crisis de otro tiempo se producía, de un lado, el desempleo masivo y el descenso vertical del poder adquisitivo de la población trabajadora y, de otro lado, la acumulación de grandes stocks de mercancías no realizadas; esto desembocaba de ordinario en un aumento de la oferta sobre la demanda y, por ende, en la baja de los precios. Sin embargo, en la crisis actual del capitalismo se registra una reducción de la producción y un paro masivo, pero a la vez un alza en flecha de los precios. Esto es resultado, como hemos dicho, del deterioro del mecanismo del mercado capitalista tradicional, donde se formaban los precios, deterioro debido a la intervención de los grupos financieros e industriales indígenas y de las sociedades multinacionales. Unos y otras manipulan los precios en beneficio exclusivo suyo y en detrimento de la economía nacional, en particular de las masas trabajadoras.

Por ejemplo, lo mismo que en otros países capitalistas, el dominio del mercado español pertenece hoy a una élite reducida a tres o cuatro grandes de cada sector económico —verdaderos detentores del poder financiero e industrial del país—, que han substituido la clásica competencia capitalista por pactos sucesivos entre

oligopolios y monopolios para determinar el volumen de producción, los precios, etc., etc.

El periodo en que nos encontramos tiene profundas repercusiones económicas, sociales y políticas. Ha exacerbado bruscamente la contradicción principal del mundo capitalista, es decir, la existente entre el trabajo y el capital. La tensión social se debe, ante todo, a las tentativas de la burguesía monopolista de hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. La inflación y, por tanto, la carestía de la vida, el desempleo masivo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo golpean fuertemente, en primer lugar, a la clase obrera. La tensión social se debe asimismo a la agudización de los problemas de las necesidades sociales de las capas laboriosas de la población, necesidad que no satisface la sociedad capitalista. Entre ellas figuran la vivienda, la asistencia médica, la instrucción, el defectuoso y caro transporte urbano y de cercanía, las dificultades para el descanso y el restablecimiento de las energías y la salud de los trabajadores, el mantenimiento de condiciones ecológicas anormales, que constituye un gravísimo problema en países como el Japón, etc., etc.

Los trabajadores tienen que defender cada hora, cada día, su nivel de vida y su puesto de trabajo frente al gran capital. La lucha huelguística ha alcanzado niveles insospechados, millones y decenas de millones de trabajadores se declaran en huelga y salen a la calle a luchar por sus reivindicaciones, chocando con las fuerzas que salvaguardan el «orden» capitalista.

La intensa lucha de los trabajadores y la multiplicación de los conflictos sociales producen su impacto en el clima político de los países capitalistas. Las clases gobernantes tropiezan con dificultades cada vez mayores para dirigir la sociedad, se cuartea su hegemonía, se descompone el aparato político de la dominación del capital, y los partidos políticos clásicos de la burguesía se desprestigian ante el pueblo y sufren verdaderos fiascos en las elecciones municipales, regionales y parlamentarias de una serie de países capitalistas.

Sin embargo sería un craso error creer que el capitalismo carece de reservas para apuntalar la aguda inestabilidad de su economía, aunque son cada día menores sus posibilidades para poner freno a la espontaneidad de la producción capitalista, como ha podido hacerlo, en cierta medida, en los años de la posguerra. Ello quiere decir que no se puede esperar, por muy difíciles que sean las vicisitudes por las que aún ha de pasar el capitalismo, un desplome automático de éste como consecuencia de la crisis.

El desprestigio creciente de los círculos gobernantes, las dificultades de la economía capitalista y el derrumbe del mito de que el capitalismo de hoy puede librarse de las crisis, abre nuevas posibilidades para desplegar la lucha de los trabajadores en todos los frentes, aglutinar las fuerzas de izquierda, especialmente las de la clase obrera, y reforzar sus organizaciones políticas y sindicales.

En la moderna sociedad capitalista, la contradicción principal de ésta lleva objetivamente a aumentar la carga revolucionaria de ingentes masas de trabajadores que sufren el desempleo, la reducción de su jornada de trabajo con mengua de su salario, el empeoramiento de las condiciones de vida y la miseria cultural.

La carga revolucionaria de las masas, por muy fuerte que sea, no puede por sí sola hacer saltar las estructuras del capital monopolista de Estado, que hoy es el factor determinante de la vida económica y política de los países capitalistas.

En la presente situación global del mundo capitalista nos encontramos ante la disyuntiva siguiente:

—la prolongación de la vida del sistema capitalista, que se adapta a las condiciones de la confrontación con el socialismo, manobra frente a los graves conflictos sociales en cada país y aplica nuevas formas de coloniaje para explotar a los pueblos del «tercer mundo». Es indudable que esa prolongación implicará nuevos y más grandes sufrimientos para las masas trabajadoras.

O, por el contrario,

—la transformación socialista del capitalismo, transformación que liquidará la explotación del hombre por el hombre, pondrá en correspondencia las fuerzas productivas con las relaciones de producción socialistas y desbrozará el camino para el progreso incesante de la vida material y espiritual de los hombres. Tomando en cuenta los niveles alcanzados por los países capitalistas desarrollados de Europa Occidental, es de suponer que en el orden material las transformaciones socialistas se realizarían con menores costes para la población trabajadora y a ritmo más acelerado que en la Rusia de 1917.

Por eso no es extraño que en torno a dicha disyuntiva tenga lugar una intensa lucha ideológica. Los ideólogos burgueses sostienen que el capitalismo monopolista de Estado, debido a la alta concentración de la producción y del capital, está superando la contradicción principal y haciendo compatibles los intereses de la burguesía y el proletariado. Consideran que el capitalismo dispone de recursos materiales y humanos para abrir un ciclo de «renovación» del capitalismo. Por consiguiente, afirman que la actual crisis es pasa-

jera y superable y que el capitalismo proseguirá su desarrollo histórico hacia una «sociedad de prosperidad general». Aunque a veces parezca paradójico, esas ideas, blanqueadas con tintes pseudo-científicos, circulan en el movimiento obrero e incluso prenden en ciertos sectores de éste.

Por su parte, los oportunistas y revisionistas de derecha propagan la tesis de que en los países capitalistas desarrollados, sobre todo de Europa Occidental, es posible la evolución del capitalismo hacia el socialismo, descartando la transformación revolucionaria. Por eso consideran innecesaria la confrontación con el capitalismo, y hoy incluso llaman a la clase obrera a que contribuya con su sacrificio a «sacar al capitalismo de la crisis económica en que se debate».

Para los oportunistas y revisionistas de derecha, los grandes problemas de la sociedad capitalista pueden ser resueltos mediante una serie de reformas, susceptibles de ser alcanzadas a través de coaliciones de partidos, de los mecanismos electorales y de la vía parlamentaria y pacífica, dejando intangible en lo fundamental las estructuras del capital monopolista de Estado, estructuras que por el camino del «juego democrático» pueden transformarse un buen día en socialistas.

Al hacer este sucinto análisis, el Comité Ejecutivo no se propone, ni mucho menos, pronosticar cuál va a ser el desenlace de la actual crisis económica del capitalismo, ya que ello entra en el campo de las investigaciones científicas.

Sin embargo, el Comité Ejecutivo llega a la conclusión de que si bien es cierto que el sistema capitalista dispone aún de reservas y capacidad de maniobra social para poder «ir tirando», no es menos cierto que el capitalismo —en su esfuerzo por «alargar su vida»— no se enfrenta hoy en Europa Occidental con una estrategia revolucionaria común.

El Comité Ejecutivo estima que la única estrategia revolucionaria en las circunstancias de la actual crisis del capitalismo consiste en estimular las cargas de rebeldía acumuladas en las masas trabajadoras para encauzarlas hacia objetivos claros y definidos, combinando las vías y formas de lucha parlamentarias y extraparlamentarias, pacíficas y no pacíficas, económicas y políticas, y desplegando una lucha intransigente contra la ideología burguesa y las corrientes oportunistas y revisionistas en el movimiento obrero.

A juzgar por los abundantes artículos y declaraciones de representantes de partidos comunistas de la Europa capitalista, el Comi-

té Ejecutivo deduce que no se pertrecha a la clase obrera de una correcta línea política que ensamble la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones económicas y sociales de hoy con una perspectiva socialista real. Y, por tanto, se produce un divorcio entre los objetivos inmediatos y futuros, lo que acarrea dos consecuencias, a saber, el socialismo como meta queda para las calendas griegas y se da pie a la proliferación de ilusiones y corrientes reformistas en el movimiento obrero y en el seno de esos mismos partidos.

El Comité Ejecutivo sostiene la tesis leninista de que del capitalismo monopolista de Estado sólo se puede ir al socialismo a través de la instauración del poder revolucionario de la clase obrera, que en la ciencia marxista-leninista se denomina «dictadura del proletariado», y pasando por etapas presocialistas cuando lo exigen las circunstancias concretas del proceso revolucionario.

ESPAÑA EN LA ENCRUCIJADA, ENTRE EL CONTINUISMO FRANQUISTA Y LA DEMOCRACIA

La crisis económica.

PARA meter de matute su averiada mercancía, ciertos políticos españoles repiten hasta la saciedad que «España es diferente», tomando sus deseos por realidades. De este modo absolutizan las particularidades nacionales y desvinculan al país del concierto del mundo capitalista.

España es parte integrante del sistema capitalista mundial y no puede evadirse de la dinámica general de ese sistema. Comparte las contradicciones y fenómenos propios del capitalismo, que se entrelazan con aquellos que genera la lucha de clases de nuestro país. Naturalmente que las contradicciones y fenómenos del capitalismo actúan en España a través de sus estructuras económicas, políticas y culturales.

Por cuanto el sistema capitalista mundial se debate actualmente, como es sabido, en una aguda crisis económica, España no constituye una excepción a la regla. En la economía española se proyec-

tan las consecuencias de esa crisis, a las cuales se suman los desequilibrios y tensiones que provoca hoy su propia estructura, sin que ello suponga un proceso automático de transmutación.

Debemos desenmascarar en nuestra propaganda la versión fabricada por determinados círculos gobernantes españoles, que quieren hacer creer a la opinión pública que las dificultades económicas de España provienen exclusivamente de la crisis del capitalismo mundial. A la vez, debemos desenmascarar también el reverso de esa versión, que consiste en sembrar ilusiones de que la crisis de la economía nacional se resolverá a la par con la reactivación de la economía capitalista mundial.

¿Cuál es el cuadro general de la economía española?

Sin pretender ser exhaustivos en la caracterización del estado actual de la economía nacional, ésta se distingue, entre otros, por los rasgos siguientes: el estancamiento de la economía, especialmente en la industria, donde se manifiesta una importante recesión, tanto en el producto industrial bruto, en la utilización de la capacidad productiva, como en la tasa de inversión; fuertes tensiones inflacionistas, sobre todo a causa de factores endógenos; un exorbitante déficit de la balanza de pagos, que constituye un verdadero récord en la Europa capitalista. La continuación de este desequilibrio amenaza con irse comiendo, como Saturno, los 5.800 millones de las reservas de divisas, con la agravante de que las deudas exteriores (sectores público y privado) alcanzan ya los 8.700 millones de dólares. A todo ello se suma el sabotaje económico de la burguesía monopolista española, atenta únicamente a salvaguardar sus intereses, frente a la eventualidad de un desarrollo de los acontecimientos por vías no previstas por ella, y la escandalosa fuga de capitales españoles, que ha tenido eco incluso en la prensa extranjera

En este panorama económico se registra en España un paro creciente, que se acerca al millón de trabajadores, de los cuales más de la mitad no perciben seguro de paro. Los porcentajes del desempleo son muy desiguales en los sectores de la producción y en las áreas geográficas; por ejemplo, en la construcción alcanza, según cifras oficiales, al 10%, mientras que a Andalucía y Extremadura les corresponde el 30% del paro nacional. La recesión en la actividad inversionista es también importante. En 1975 se evaluó un descenso del 9%.

Frente a esta grave situación económica y social ¿qué hace el primer gobierno de la corona, presidido por Arias Navarro? ¿qué medidas toma? El gobierno de la corona es fiel a la tradición del franquismo, de defensa a ultranza de los sacrosantos intereses del

gran capital, y ha optado por hacer recaer el peso de la crisis y de las dificultades económicas sobre el mundo del trabajo. Sus reformas económicas se reducen en realidad a lo siguiente: congelación de salarios, disminución del consumo popular, aumento del paro y una reforma fiscal para que «paguen más los pobres y paguen menos los ricos»; en una palabra, los trabajadores deberán apretarse más aún el cinturón.

Resulta monstruoso y, a la vez, peregrino, afirmar, como lo hace el gobierno, que la inflación y la carestía de la vida están originadas por los aumentos salariales que han arrancado los trabajadores tras enconadas luchas reivindicativas. Como es bien conocido, la constante subida de los precios de los artículos de primera necesidad, así como de los distintos servicios, reducen al mínimo los incrementos de los salarios y sueldos. Basta decir que, según el Instituto Nacional de Estadística, el coste de la vida en España ha subido en los últimos 12 meses en el 16%.

En la propaganda oficial se baraja a menudo la Renta media por habitante; pues bien, cerca de las tres cuartas partes de los españoles reciben el 50% de esa Renta y en el agro español hay 860.000 asalariados que perciben menos del 25%, mientras que los grupos financieros e industriales, que detentan en lo fundamental el poder económico del país, obtienen beneficios fabulosos.

Durante la época de las vacas gordas, la mayor parte de los frutos del crecimiento económico de España han ido a parar a los bolsillos de unos pocos y ahora, en los momentos de crisis y dificultades, se quieren cargar los sacrificios a los trabajadores. Esa es la justicia social que practicó el franquismo y que —en esencia— se pretende seguir aplicando después de desaparecido el dictador. Por eso, los trabajadores no pueden esperar nada de la monarquía juancarlista y de sus gobiernos, y se equivocan quienes creen que los trabajadores van a permitir se les continúe explotando de manera tan inícuca. Por el contrario, defenderán cada vez con más energía y organización sus intereses vitales y lucharán por mejoras salariales, contra la carestía y el paro.

Por su parte, ciertos economistas y políticos de los medios democráticos del país ofrecen proyectos de reformas económicas que de hecho no son más que paliativos, pues no abordan las causas que originan la actual crisis económica en España.

Todos coinciden en que el llamado «modelo económico liberal» implantado en los años 60 (cuando el franquismo se vio obligado a abandonar el modelo autártico) está agotado y se necesita crear un «nuevo modelo económico» a través de reformas para adecuar lo

económico con lo político. Ello permitiría la superación de la actual crisis económica, y en lo político conllevaría a la instauración de un régimen democrático.

Esos economistas y políticos se plantean como condición para realizar sus proyectos de reformas el aplazamiento de las reivindicaciones básicas de los trabajadores. Por tanto, no se trata de un cambio substancial en la estructura económica capitalista, sino de un reajuste de ésta.

Acerca del reajuste económico, unos piensan, como el partido carrillista, que el país deberá entrar en una etapa larga de «democracia económica y social», en la cual no se adoptarán medidas de nacionalización hasta tanto no sea consolidada la democracia. Para ese partido, el reajuste económico no implicará limitaciones al campo de acción del capital extranjero en España. Otros creen que el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea ayudará a resolver los desequilibrios de la economía nacional, como el creciente déficit de la balanza comercial. Algunos confían en una salida que consistiría en el establecimiento de lazos estrechos con el «Tercer mundo» para eliminar, según ellos, «dependencias de los bloques soviético y norteamericano». Hay quienes opinan que puede llegarse a un «pacto social», es decir, a un acuerdo entre el capital y el trabajo, negociado en base a un compromiso político, para reactivar la economía nacional y sacarla de la crisis.

Las opiniones enunciadas se basan en el supuesto de que al capitalismo monopolista de Estado —predominante hoy en la economía española y orgánicamente ligado a las multinacionales—, se le puede cercenar con reformas económicas y, de este modo, conceder el estímulo prioritario al capital no monopolista.

El supuesto es, a nuestro juicio, erróneo. En primer lugar, porque no ha existido en la historia ningún régimen socioeconómico en el que las clases dominantes tengan disparidad de intereses en la esfera económica y en la política. España, repetimos, no es una excepción a la regla.

Nos preguntamos ¿acaso es posible que la democratización de España dependa en gran parte de un «pacto social» entre la burguesía monopolista y las fuerzas obreras y democráticas?

Entendemos que los intereses en bloque de las clases dominantes españolas garantizan hoy la intangibilidad de las estructuras económicas y políticas capitalistas, hasta tanto no sean destruidas por la acción revolucionaria de la clase obrera y sus aliados.

En segundo lugar, aquellos sectores de las clases dominantes, bautizados con el nombre de «derecha civilizada» o «reformistas», que gozan de poder económico, pero no del suficiente poder político, pugnan por obtener un área mayor de éste último, desplazando a sectores que detentan hoy el poder político, o bien compartirlo con ellos en provecho directo de sus intereses económicos.

En tercer lugar, es absurdo pensar que puede consolidarse un poder democrático sin que se lleven a cabo hondas transformaciones económicas, es decir, lo que constituiría precisamente el afianzamiento por la base de ese poder político. Por eso, no es de extrañar que los voceros carrillistas griten: «¡No a la vía portuguesa!»

En opinión del Comité Ejecutivo, los proyectos de reformas económicas que ofrecen ciertos economistas y políticos de los medios democráticos del país no pueden dar solución a los problemas económicos y políticos de la España de hoy.

La verdadera solución de la crisis económica consiste en atacar sus raíces, las causas que la motivan en el plano nacional. Para ello no hay otro camino que resolver la contradicción principal existente en la sociedad española entre las fuerzas productivas en expansión y unas relaciones de producción cada día más estrechas, que obstaculizan ese desarrollo. Ello sería en lo económico el programa máximo de los trabajadores, es decir, la socialización de los medios de producción y la liquidación de la explotación capitalista. El programa mínimo, que es el que está hoy al orden del día, sería «recortar» el poder económico y político del gran capital mediante medidas antimonopolistas impuestas por un poder revolucionario, que fuera tomando en sus manos los instrumentos de decisión económica. Este poder incorporaría a los trabajadores a la gobernación del país, llevaría a cabo una profunda Reforma Agraria, aplicaría una planificación democrática tendiente a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores manuales e intelectuales y a salvaguardar los intereses de las empresas pequeñas y medianas, articularía los diversos sectores de la economía nacional y disminuiría las desproporciones socioeconómicas entre las provincias y regiones, entre la ciudad y el campo; reconocería el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades hispanas, implantaría un sistema fiscal democrático en favor de los trabajadores y de todos los contribuyentes modestos, etc., etc.

En las condiciones actuales de España, ese régimen no puede ser más que la República Democrática Popular entendida como una república democrática que vaya adquiriendo carácter popular por la creciente participación de los trabajadores en las esferas de la dirección económica y política del país; república que abra cauce ha-

cia el socialismo, puesto que la democracia y el socialismo no están separados por una muralla china, sino que constituyen dos etapas de un mismo proceso revolucionario.

La crisis política

Nuestro Partido ha definido en su Programa el régimen franquista como la forma histórica, específica, del poder del capital monopolista de Estado español, instaurada por las clases dominantes tras una cruenta guerra civil para garantizar las posiciones económicas, políticas y sociales de esas clases. Dicha definición cobra nueva actualidad con el continuismo franquista expresado en la monarquía de Juan Carlos.

La esencia del régimen franquista ha sido desde su nacimiento fascista. Y, como se sabe, el fascismo representa la dictadura terrorista de los sectores más reaccionarios de la sociedad capitalista moderna, dictadura enfilada a aplastar por la violencia más feroz el movimiento revolucionario y democrático. Por eso, el franquismo anuló los más elementales derechos cívicos y libertades democráticas y, al mismo tiempo, combinó siempre la más dura represión con la demagogia, en dependencia de la exacerbación de los conflictos sociales, especialmente, de la lucha de la clase obrera.

Después de la muerte del dictador ha desaparecido un elemento substancial del régimen fascista, es decir, el poder personal del general Franco, mientras que el sistema de dominación del capital monopolista de Estado continúa bajo la forma monárquica.

Prueba palmaria de este aserto nuestro son las declaraciones hechas en su discurso televisivo del 28 de abril último de Arias Navarro. Dijo que «la legitimidad de origen y la forma monárquica del Estado» constituyen el núcleo vital y «el punto de partida de esta nueva etapa de la vida nacional». E insistiendo sobre esta idea arguyó que «sólo se reforma lo que se desea conservar; sólo se conserva lo que se estima». Por eso, para él «la continuidad y la reforma son conceptos que se complementan, que se exigen recíprocamente... No hay reforma sin continuidad, ni sin reforma sería posible la continuidad».

La crisis política del régimen viene de lejos y está motivada, en lo fundamental, por la abnegada y tesonera lucha de los trabajadores, que han venido erosionando la dictadura fascista y que hoy, bajo la monarquía continuista, protagonizan la acción por la conquista de las libertades democráticas. Esta crisis ha entrado ahora en una nueva etapa que se distingue por la exacerbación de la lucha de clases.

El creciente movimiento de las masas trabajadoras, las dificultades con que tropieza hoy día la economía española y la desaparición del poder personal del general Franco tienen sus repercusiones en la llamada «clase política» del régimen. Sus diversos sectores mantienen posiciones diferentes acerca de las formas de conducción política del país para preservar el sistema, adaptarlo a la nueva situación creada en España y sacarlo de la crisis.

La extrema derecha pretende mantener el «espíritu del 18 de julio», es decir, «tirar hacia atrás». Por ejemplo, el fascista Girón ha declarado que «el único sistema político que aceptamos es el régimen del 18 de julio».

La derecha española actual es muy heterogénea. Está formada por diversos grupos y partidos que podemos englobar en la llamada derecha del «sistema» para diferenciarla de la derecha que se encuentra fuera de éste. Además, en esa derecha debemos incluir a las fuerzas representadas en el Gobierno, todavía no organizadas en partidos políticos, incluyendo a los sedicentes «reformistas». Las diferencias entre esos partidos, grupos y fuerzas radican únicamente en las dimensiones de las «reformas» y en la celeridad para ponerlas en práctica, pero coinciden en lo esencial: asegurar el continuismo de las estructuras creadas por el franquismo, oponiéndose a toda ruptura democrática y plebiscitar la monarquía de Juan Carlos.

Las formas descartadas fascistas de gobierno que preconiza la extrema derecha española no son hoy las más adecuadas para la incorporación de España a la Europa integracionista de los monopolios, amén de que después de cuarenta años de franquismo están muy desacreditadas en el país. A los círculos gobernantes de Europa Occidental, después de la derrota del fascismo en la segunda guerra mundial, les resultan incómodas esas formas fascistas de gobierno porque chocan con los métodos de la democracia tradicional burguesa y con los «slogans» de su propaganda sobre la «libertad», la «democracia», la «civilización occidental» y otros, lo que no excluye, ni muchos menos, que recurran ellos mismos a los métodos fascistas de gobierno, en el caso de que se pongan en peligro sus intereses cardinales, bajo el empuje de las fuerzas obreras y auténticamente democráticas.

De ahí que la burguesía monopolista europea aconseje a su homóloga la española que lime las aristas más agudas del régimen fascista y cubra a éste con un ropaje institucional aceptable para poder incorporar España a los mecanismos integracionistas de Europa.

Después de la muerte del general Franco, en las postrimerías

de 1975 y comienzos de 1976, aparecieron en la escena política española tres opciones a la situación creada: la de cambios institucionales mínimos, la de la homologación de España con los modos de vida democráticos burgueses típicos de la actual Europa capitalista y, por último, la de signo socialista.

I. *El gran capital español ha hecho su elección optando por cambios institucionales mínimos.* Estos cambios son definidos como «evolución sin ruptura».

Después de seis meses de un tira y afloja, el gobierno Arias Navarro llevó a las Cortes un paquete de proyectos de Ley, que éstas aprobaron por un procedimiento de urgencia. Estas leyes regulan:

—el derecho de reunión y manifestación, que al especificar el concepto de lícito y de lo ilícito deja en manos de las autoridades la interpretación y el control de ese derecho, privando así a los ciudadanos de su pleno ejercicio, y

—el derecho de asociación política, que por su contenido de clase y los fines que persigue no da margen para una auténtica libertad de partidos políticos que representen a los sectores de opinión del país, sin excepción alguna,

Además, las Cortes aprobaron una ley de modificaciones del Código Penal relacionada con la que regula el derecho de reunión y manifestación.

Por las declaraciones de Arias Navarro se deja en la más absoluta obscuridad lo que va a ser en realidad la futura ley electoral, todavía más confusa con la frase de «representantes de la familia» en cuanto al carácter de los que van a ser elegidos. Entre unas elecciones libres y lo que propone Arias Navarro no hay nada de común.

La reforma sindical se deja para un Congreso de la CNS que, por lo visto, se propone mantener la esencia del verticalismo corporativo, fascista, con la creación del Consejo Económico Social, integrador de trabajadores, empresarios, Administración y «otros intereses colectivos». En cuanto al reconocimiento de las libertades y derechos de las nacionalidades hispanas, todo queda en la más completa nebulosa.

Las reformas constitucionales que van a ser sometidas a referéndum en el próximo mes de octubre se reducen a dos cuestiones: legitimar la monarquía de Juan Carlos y crear un sistema bicameral con un parlamento de muy relativa representatividad, al que

tendrán difícil acceso las verdaderas fuerzas obreras y democráticas, y una especie de Senado que será la metamorfosis del actual Consejo Nacional del Movimiento, en el que anidan las fuerzas más reaccionarias de la sociedad española.

Para poner en práctica sus «reformas», el gobierno Arias Navarro, incluídos los ministros llamados «reformistas», invocan la moderación, el orden —que es su mayor preocupación—, y condenan las acciones reivindicativas de las masas trabajadoras. Así, Areilza afirma que «si no hubiera disturbios, el camino de las reformas sería más rápido». Fraga Iribarne sostiene que «sería conveniente potenciar las zonas de moderación frente a los extremistas». Esas exhortaciones significan, ni más ni menos, que las masas trabajadoras españolas no deben luchar por sus reivindicaciones económicas y sociales, por sus derechos políticos, sino someterse mansamente a las «reformas» del Gobierno.

La opción del gran capital español por cambios mínimos institucionales está condicionada por el miedo que le produce el creciente potencial revolucionario de los trabajadores y la toma de conciencia de su fuerza y de sus fines de clase; por el reaccionarismo secular de las oligarquías españolas, propensas siempre a emplear la violencia en la solución de los problemas sociales, y por la desmedida sed de acumulación de riquezas, mediante la más despiadada explotación de las masas trabajadoras.

Todo induce a afirmar que los trabajadores españoles no podemos esperar de ningún sector del gran capital, que hoy domina las esferas de decisión del gobierno, ni la libertad, ni la democracia, ni el progreso social. Sólo es posible conquistar esos derechos y libertades y llevar al país por la vía democrática en lucha, precisamente, contra la oligarquía española.

Como ha escrito una revista española, las reformas de Arias Navarro no son otra cosa que «la nueva vía de la democracia orgánica» creada por Franco, es decir, que no se desmantelan las estructuras de la dictadura fascista.

II. *Por la homologación de España con la democracia burguesa de la Europa de los monopolios se pronuncia la llamada «oposición moderada».* Como se sabe, en un principio estaba dividida en dos organizaciones, a saber, la «Junta democrática», cuyo principal animador era el partido carrillista, y la «Plataforma de Convergencia Democrática», cuya fuerza principal era el Partido Socialista. Hoy, ambas organizaciones están reunidas en una heterogénea «Coordinadora Democrática», que incluye, además del Partido Socialista y el

partido carrillista, partidos democristianos y liberales de derecha y centro y grupos de tendencias trotskista y maoísta. Así, pues, a esos partidos y grupos se les puede aplicar para mayor claridad el denominador común de «oposición moderada» tanto por su composición social y sus planteamientos políticos como por sus formas de acción. De pasada diremos que la «Coordinadora democrática» tiene unas tareas muy limitadas y dejará de existir en cuanto se abra el periodo electoral prometido por el Gobierno.

En el ocaso de la vida del dictador Franco apareció la consigna de la llamada «ruptura democrática» en los medios de la «oposición moderada». Este concepto postulaba en aquel entonces un cambio político en España, pero dejaba en la sombra los medios indispensables para conseguirlo. El programa de «ruptura democrática» contemplaba la amnistía de los presos y exiliados políticos, el establecimiento de las libertades democráticas, la constitución de un gobierno provisional y la apertura de un periodo constituyente.

Es un hecho ya reconocido que la «ruptura democrática» no ha podido imponerse. La causa principal del fracaso de la «ruptura democrática», como consigna, estriba en que ésta no se concebía desde un principio como un proceso para poner fin a las estructuras del régimen franquista y abrir cauce a una verdadera democratización de España. La «oposición moderada» cifraba esperanzas en que la monarquía podría propiciar la reorientación democrática de España y, por eso, daba de lado la alternativa de República democrática.

Además, existía en la «oposición moderada» una tendencia predominante a la componenda con sectores de la derecha, soslayando en cierto modo la movilización de los trabajadores, que en definitiva son los que pueden imponer el cambio democrático en España.

En los meses transcurridos desde la muerte de Franco se creó una situación un tanto paradójica, en la que la «oposición moderada» llamaba a mantener el «orden social» y a no precipitar los acontecimientos, mientras que las masas trabajadoras salían a la calle demostrando gran combatividad y respondiendo con la violencia a la violencia de las fuerzas represivas del Gobierno.

Representantes de la «oposición moderada» han llegado incluso a condenar públicamente las acciones masivas de los trabajadores, sobre todo las de Vitoria, que fueron la culminación de un conflicto laboral que la patronal y el Gobierno intentaban ahogar para no satisfacer las legítimas demandas de los obreros. Los culpables de los asesinatos de los trabajadores no han sido «las provocaciones de los grupos extremistas», como quieren hacer creer las fuerzas represivas, sino el Gobierno de la monarquía y, en primer lugar, su mi-

nistro de la Gobernación, Fraga Iribarne, cuyo objetivo era cortar el poderoso movimiento reivindicativo de los trabajadores.

Al fiasco de la consigna «ruptura democrática» ha contribuido también el hecho de que la «oposición moderada» se haya atribuido la representación de todas las fuerzas antifranquistas, mientras que en realidad personificaba, como se sabe, sólo a una parte de ellas.

En fin de cuentas, del fracaso de la consigna «ruptura democrática» se ha beneficiado, en primer lugar, el Gobierno Arias Navarro, que ha conseguido con menos dificultades llevar adelante sus planes políticos de «reforma» y tener mayor libertad de maniobra. Consecuencia lógica de ese fracaso ha sido su evolución, la única posible, hacia la denominada hoy «ruptura democrática negociada o pactada».

En la declaración de la «Coordinadora democrática», de abril último, se concibe la «ruptura democrática pactada» como una evolución política del país, basada en reformas negociadas entre la oposición y representantes de la derecha, del Ejército y la Iglesia, incluidos los llamados ministros «reformistas» del actual equipo gobernante de Arias Navarro.

El Comité Ejecutivo no puede por menos de observar una contradicción flagrante en la actitud de la «Coordinadora», que consiste, de un lado, en abogar por reformas democráticas y, de otro, pretender plasmarlas en la realidad con el concurso de aquellas fuerzas que se oponen al verdadero progreso político y social del país, como evidencian las posiciones de la derecha española, del Gobierno Arias Navarro, del Ejército y la Iglesia, que de hecho conjugan orgánicamente el continuismo franquista con tibias reformas, que no pueden satisfacer, en modo alguno, las aspiraciones democráticas del pueblo español.

En efecto, se habla mucho de la contribución que podría hacer el Ejército a un cambio democrático en España. Es cierto que el Ejército podría desempeñar un papel progresista en la presente situación política. Pero para ello necesitaría estar penetrado por corrientes democráticas y liberales, que neutralizaran a los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y respaldaran las acciones de las fuerzas políticas y sociales que propician el cambio democrático. No digamos de la función que cumpliría en una situación revolucionaria, cuando una parte del Ejército se pasaría del lado del pueblo y se enfrentaría abiertamente con la reacción.

Sin embargo, la realidad es muy otra. El Ejército español es hoy una institución cohesionada y garante de las estructuras básicas so-

cioeconómicas y está al servicio de la monarquía. Así lo confirman los más altos jefes del Ejército. Por ejemplo, el ministro del Ejército, teniente general Alvarez-Arenas, ha declarado que «con Franco o con el rey, el Ejército es el mismo». El vicepresidente del Gobierno, teniente general De Santiago ha dicho a su vez que «las Fuerzas Armadas están frente a la subversión», entendiéndolo por ésta —como en los mejores tiempos de Franco— cualquier acción reivindicativa de los trabajadores o demanda de libertades y derechos; se reafirma en la defensa de los intereses de las clases dominantes españolas al hablar de la defensa de «los valores que en conjunto constituyen la ideología específica y tradicional de España», según este militar. Otros altos jefes del Ejército manifiestan su «adhesión a la monarquía» y su «lealtad» hacia ésta, como el teniente general Díez-Alegría. Sin hablar ya de los generales que se encuentran situados políticamente en la extrema derecha, de puro corte fascista.

Al hacer esta afirmación, el Comité Ejecutivo no desconoce que pueda haber entre la oficialidad elementos con ideas progresistas, actitudes críticas a las formas de gobierno y a los problemas profesionales del Ejército, lo cual constituye un fenómeno positivo, como es el caso de los nueve oficiales condenados injustamente por un tribunal militar. Pero eso no da pie hoy para creer que el Ejército esté minado por corrientes de oposición y no sea una garantía de las instituciones políticas actuales.

Otro tanto se podría decir de sectores del clero que adoptan también una posición crítica ante las arbitrariedades del régimen y se manifiestan en favor de la justicia social. Pero, en su conjunto, la Iglesia es contraria a la ruptura democrática y no se la puede calificar de «monolíticamente izquierdista». Pese al «aggiornamento», la Iglesia católica italiana, y por consiguiente el Vaticano, desarrollan actualmente una desafortunada campaña anticomunista para impedir que los creyentes, en primer lugar los trabajadores, den su voto a los candidatos comunistas en las elecciones de Italia. Y no digamos ya de la Iglesia católica portuguesa, que ha batido todos los récords de ultrarreaccionarismo político.

Prosigamos, el examen que viene haciendo el Comité Ejecutivo de la trayectoria de la «oposición moderada» permite definir las etapas fundamentales que ha atravesado esa oposición.

La primera etapa de la «oposición moderada» es la de la consigna de la «ruptura democrática», entendida como la negación de las estructuras políticas e institucionales creadas por Franco. Esta consigna no pasó de ser una operación propagandística.

§

La segunda etapa es la de la consigna de la «ruptura negociada»

con los representantes del continuismo franquista, que tienen en sus manos las riendas del gobierno.

La tercera etapa se vislumbra, a nuestro juicio, como una etapa de colaboración con la política reformista de la monarquía y que tendrá por objeto integrarse en los mecanismos políticos e institucionales que crean el paquete de leyes aprobado por las Cortes y el referéndum que se proyecta por el gobierno para el próximo octubre.

Y la cuestión no cambia porque la «oposición moderada» rechace ahora el referéndum que propone el Gobierno celebrar en Octubre para introducir ciertas reformas institucionales.

Debe destacarse que estos proyectos de tibias reformas son blanco hoy de fuertes ataques de la extrema derecha, atrincherada, sobre todo, en las Cortes y en el Consejo Nacional del Movimiento. Presionado por la extrema derecha y, al mismo tiempo, por las fuerzas de izquierda, el Gobierno tiende la mano a la «oposición moderada» proponiéndole que apoye los proyectos de reformas. José María Areilza, ministro de Estado, ha llamado a la «oposición moderada» a concluir con el Gobierno un «pacto nacional» al objeto de llevar a cabo las reformas propuestas, independientemente de que «gusten o no gusten». A la vez la exhorta a que reconozca y ayude al actual gobierno, tanto que Fraga Iribarne propone «compromisos históricos» con ella.

Los hechos confirman nuestras conclusiones, la «oposición moderada» pasa a ser de fuerza opositora a fuerza colaboradora con la monarquía, lo que representa, en definitiva, un reforzamiento de esta última.

Asistimos a un proceso de reagrupamiento de fuerzas políticas, en el que la «oposición moderada» y los partidos de la derecha del «sistema» incluído un eventual partido de los llamados «reformistas» y, posiblemente, otro de figuras destacadas del actual Gobierno, se disponen a participar en el «juego democrático» que les ofrece la monarquía de Juan Carlos. Este proceso, que se denomina hoy en los círculos políticos «estrategia soberana», persigue asimismo contrabalancear el peso que tiene la extrema derecha fascista en puntos clave del «sistema».

Cabe suponer que la «estrategia soberana» ha recibido el espaldarazo del imperialismo yanqui durante la visita de Juan Carlos a EE. UU.

Así, pues, está cristalizando un pacto «poder-oposición moderada».

da», cuyos síntomas más visibles son la campaña propagandística «el rey con la oposición» y la serie de entrevistas que ha sostenido Juan Carlos con personalidades políticas de esa «oposición», como José María Gil Robles (antiguo dirigente de la CEDA durante la República), jefe hoy de la Federación Popular Democrática, de tendencia democristiana; Joaquín Morodo, del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, y otras figuras destacadas, alguna de ellas en puertas. No sería de extrañar ver también al señor Carrillo traspasar el umbral del Palacio de la Zarzuela a fin de negociar con el soberano un puesto bajo el sol para él y su agrupación en el tinglado que está levantando la monarquía.

El Comité Ejecutivo no puede por menos de destacar la responsabilidad que contraen el Partido Socialista y otras fuerzas de izquierda atándose al carro político de la derecha española y volviendo la espalda a las aspiraciones populares de auténtico cambio democrático de signo republicano.

El planteamiento de que el pacto «poder-oposición moderada» es hoy el único viable, puesto que el país no aceptaría ni la instauración de una dictadura militar ni tampoco la toma del poder por las fuerzas obreras y democráticas por vía revolucionaria es, a juicio del Comité Ejecutivo, en primer lugar, puro chantaje y, en segundo lugar, la negación de la posibilidad real que existe en España de un cambio radical, llevado a cabo por las fuerzas obreras y democráticas en presencia.

El Comité Ejecutivo reafirma la posición del PCOE de que se puede imponer el cambio democrático que reclama el progreso de España mediante la unidad de acción de la clase obrera y de todas las fuerzas de izquierda.

Al pasar la «oposición moderada» a ser fuerza de colaboración con la corona aparecen como verdaderas fuerzas de oposición todas aquellas que se pronuncian contra la monarquía continuísta de Juan Carlos y por la República democrática, por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades hispanas y por hondas transformaciones sociopolíticas y socioeconómicas.

La lógica de la lucha política, que es implacable, permite prever que a esas fuerzas se les seguirá aplicando el *status* de «ilegales».

Llegados a este punto de nuestro examen, el Comité Ejecutivo desea exponer su opinión sobre la campaña desplegada en pro y en contra de la legalización del partido carrillista. El Comité Ejecutivo se pronuncia claramente por la legalización de los partidos políticos sin excepción y lucha por los medios que tiene a su alcance en pro de esa

legalización. Al mismo tiempo denuncia tanto la actitud discriminatoria de la «oposición moderada» en favor exclusivamente del partido carrillista, como la maniobra del Gobierno de mantener en la ilegalidad a fuerzas revolucionarias, colocándoles el rótulo de «extremistas y terroristas».

En relación con las ideas que hemos expuesto sobre la «oposición moderada» es lícito que se formule la pregunta: ¿Por qué la dirección del PCOE tomó la decisión de entablar conversaciones con los representantes de la desaparecida «Plataforma de Convergencia Democrática» para un eventual ingreso en ella?

Las razones que nos movieron a dar ese paso consistieron en que las primeras declaraciones fundacionales de la «Plataforma», a mediados de 1975, se postulaba una «ruptura democrática» con el franquismo y se abogaba por cambios substanciales en la vida social española. Estas declaraciones coincidían, en parte, con puntos fundamentales de los planteamientos políticos del PCOE.

Nuestra posición unitaria aconsejaba contribuir al fomento de organismos que se propusieran aglutinar a las fuerzas interesadas —por encima de diferencias ideológicas— en la democratización de España.

Nuestra táctica iba a consistir en luchar dentro de la «Plataforma» por soluciones que respondieran mejor a las aspiraciones de las masas trabajadoras; en discutir con las otras fuerzas en un espíritu de colaboración constructiva, de respeto mutuo, para llegar a compromisos, pero siempre que ellos no hipotecaran los principios que defiende nuestro Partido.

En la retrospectiva podemos afirmar que nuestra actitud fue acertada. Expresaba nuestra madurez política y la flexibilidad de nuestra táctica, que no se fundamenta en la fórmula sectaria de «todo o nada».

Los que estamparon su firma hace ahora un año al pie de la Declaración de la «Plataforma», que propugnaba una política unitaria «sin exclusivismos», han mostrado su inconsecuencia al hacer una discriminación con nuestro Partido.

La causa de fondo de esa discriminación se debe a que el Partido Comunista Obrero Español, por su programa, por su línea política y su acción práctica, chocó con las posiciones de los grupos democristianos, trotskistas, maoístas que a la sazón formaban parte de la «Plataforma», así como también con la influencia que el partido carrillista ejercía sobre ciertos dirigentes de esa organización. Estos

grupos y dirigentes torpedearon las conversaciones para el ingreso del PCOE en la «Plataforma de Convergencia Democrática».

Consecuente en su política unitaria, el Comité Ejecutivo exhorta a sus organizaciones y militantes a proseguir e intensificar los contactos con los militantes y organizaciones locales de los partidos que integran hoy la «oposición moderada», y, especialmente, con los del Partido Socialista.

El Comité Ejecutivo reitera su posición unitaria y está dispuesto a llegar a un entendimiento con fuerzas, partidos y grupos que, leales a sus declaraciones programáticas, pugnen por una verdadera democratización de España.

III. De las tres opciones a que nos venimos refiriendo, *la alternativa de signo socialista* es la única que puede impulsar el progreso social de España, convertir a las masas trabajadoras en los verdaderos protagonistas de la edificación de la sociedad sin clases antagónicas.

Sin embargo, para emprender la lucha por esa opción, aunque objetivamente la sociedad española está madura para ello, no se han creado todavía las condiciones subjetivas.

En primer lugar, no existe la unidad orgánica y política de la clase obrera ni la fuerza política orientadora —partido o bloque de partidos revolucionarios— que pueda dirigir la lucha de la clase obrera y sus aliados para derrocar a la burguesía y tomar el poder político.

La ausencia de esa fuerza hoy se debe, en parte, a la metamorfosis que ha sufrido el Partido Comunista, a su conversión en un partido reformista bajo la dirección de S. Carrillo y su equipo.

El Partido Comunista Obrero Español aspira a convertirse en una gran fuerza política nacional, que interprete los intereses de la clase obrera y de todos los trabajadores españoles y los oriente a marchar hacia la conquista de la democracia y el socialismo. En esta tarea está empeñado todo nuestro Partido.

NUESTRA VISION DEL CAMBIO DEMOCRATICO

EL restablecimiento de la monarquía en España está dictado por los intereses de las clases dominantes españolas y tiene por objetivo principal fortalecer el poder de éstas por todos los medios. Y, en modo alguno, debilitar dicho poder, abriendo cauce a la democracia, como algunos nos quieren hacer creer.

Contrariamente a la «oposición moderada», el Partido Comunista Obrero Español sostiene que en España no es posible establecer la democracia en el marco de la monarquía. Eso es factible sólo bajo la República. Por su negativa tradición histórica y, actualmente, por su carácter franquista, la monarquía es la antinomia de la democracia, mientras que la democracia y la República son sinónimos en España.

De ahí que la tarea principal del Partido sea cambiar la correlación de fuerzas político-sociales hoy existente, de modo que pase de la «oposición moderada» a favor de una oposición de izquierda de signo revolucionario. Esa sería la garantía del éxito de una auténtica «ruptura democrática» frente a la tentativa de la reacción —comprendido todo lo que es el continuísmo bajo la forma de la monarquía juancarlista— de mantener, en lo fundamental, las bases político-económicas del régimen franquista con ayuda del imperialismo, especialmente el norteamericano.

La estrategia política del PCOE consiste, pues, en demoler las estructuras heredadas del franquismo e instaurar una *República democrática, que es la forma de régimen estatal que más corresponde a las aspiraciones de los trabajadores y otros sectores democráticos.*

La República democrática podrá conquistarse sólo por el camino de la lucha de las amplias masas populares, *por la conversión de la lucha de clases en un movimiento revolucionario de masas, en el cual la clase obrera está llamada a jugar el papel principal.*

Esa *conversión* es lo que más teme la burguesía monopolista española y, por eso, trata de contener la lucha de los trabajadores en unas determinadas dimensiones. Para ello dosifica las reformas con el empleo de la violencia y trata de moldear ideológicamente

la mentalidad de las masas populares. En este empeño, la burguesía monopolista cuenta con el apoyo de las corrientes reformistas y oportunistas de derecha en el movimiento obrero.

La lucha por la República democrática no puede estar sometida de antemano a ningún canon, sino que revistirá las formas que exija la exacerbación de las contradicciones de clase. Prefijar que la lucha de clases de los trabajadores ha de transcurrir exclusivamente por la vía pacífica es una utopía y absolutizar la vía armada sin que existan condiciones para ello es una aventura.

El empleo de la vía pacífica o de la vía armada depende exclusivamente del grado de resistencia que oponga la reacción al cambio democrático y, por tanto, no depende de la voluntad de las masas. Sin embargo no es posible olvidar las lecciones de la historia: las clases dominantes sólo dejan el poder cuando las clases dominadas se lo impiden mediante un acto de fuerza.

Por otra parte, adjudicar a las masas trabajadoras españolas un supuesto estado psicológico —como lo hacen los carrlistas y sus amigos— que no admite hoy más que la vía pacífica, como forma de lucha, está en total desarmonía con la cruda realidad del actual movimiento social, del que somos testigos; movimiento que incluye las más diversas formas, entre ellas la respuesta de los trabajadores a la violencia de las fuerzas represivas de la monarquía.

Para conseguir la conversión de la lucha de clases en un movimiento revolucionario de masas, nuestro Partido opina que la táctica a emplear deberá ser *forjar la unidad de acción de la clase obrera, de todos los trabajadores de la ciudad y el campo*, en torno a sus reivindicaciones más sentidas, o sea, aquéllas que afectan de manera directa a su vida económica, política y sindical.

En este orden de cosas, nuestras organizaciones y nuestros militantes han de ser conscientes de que las masas trabajadoras podrán hacer suyas sólo aquella táctica y aquellas consignas que correspondan a sus intereses. Habrán de tener en cuenta también que las masas trabajadoras no están dispuestas a posponer para un futuro indefinido la solución de sus candentes problemas económicos, políticos y sociales, como les invitan con gestos mesiánicos la monarquía y su Gobierno.

El Comité Ejecutivo insiste una vez más en que la unidad de acción de las masas trabajadoras requiere un instrumento político de orientación y dirección, o sea, un bloque o frente de organizaciones y partidos que se proponga cumplir esa tarea histórica. Dicho bloque o frente ha de ser motor de la movilización de las ma-

sas trabajadoras, centro de dirección de las acciones de éstas para la toma del poder y el establecimiento de la República y núcleo fundamental que forme el Gobierno Provisional Revolucionario, encargado de realizar las transformaciones económicas, políticas y sociales que reclama el país. Por ello continúa vigente la consigna del PCOE de Frente Democrático y Revolucionario.

Esta consigna presupone asimismo la participación de nuestro Partido en todo proceso unitario, tanto en el terreno político como sindical, para conquistar las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, liquidar la monarquía y establecer la República democrática.

El PCOE estima que para dar mayor consistencia y orientación al combate que sostienen los trabajadores españoles es necesario propagar con más eficacia consignas movilizadores, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

—Contra la congelación de los salarios y por el aumento de éstos en relación con la carestía de la vida.

—Contra el paro y por la defensa del puesto de trabajo, por un seguro de paro efectivo.

—Por la revalorización de las pensiones de los trabajadores, con arreglo al coste de la vida.

—Por la adopción de medidas de ayuda a los trabajadores emigrados que se ven obligados a retornar al país como consecuencia de la crisis económica en Europa.

—Por el derecho de huelga y la libertad sindical, por el derecho de expresión, reunión y manifestación.

—Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exilados.

—Contra la represión, por la derogación de la legislación represiva y la supresión de los tribunales especiales.

—Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades y el reconocimiento de las particularidades regionales.

—Por la anulación de los acuerdos hispano-yanquis y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas, que suponen un grave peligro para la independencia nacional y la integridad territorial.

—Contra la monarquía juancarlista, por la República Democrática.

El problema sindical

Dentro de la problemática de la unidad de acción de la clase obrera está el problema sindical, sobre el que el Comité Ejecutivo desea exponer su punto de vista.

Al lado de la proliferación de partidos y grupos políticos —que algunos observadores calculan que su número llega a cerca de trescientos— existen también bastantes organizaciones de tipo sindical, que se mueven en la semilegalidad o en la clandestinidad.

Como se sabe, el PCOE, recogiendo la tradición de los comunistas españoles en el problema sindical, aboga por la creación de una *central sindical única, independiente del Gobierno y de la patronal, y por la liquidación total de los sindicatos verticales franquistas.*

La central sindical única la concebimos como una organización representante y defensora de los intereses de todos los trabajadores manuales e intelectuales, de la ciudad y el campo, sin distinción de convicciones políticas y religiosas; como una organización que se rija estrictamente por principios democráticos, tenga por meta la emancipación social de los trabajadores y sea eminentemente internacionalista.

Mientras no existan en España las condiciones para la creación de una tal central sindical única, el PCOE se pronuncia por la unidad de acción de todas las organizaciones sindicales que hoy actúan en el país, sin discriminación alguna, pero que reconozcan la lucha de clases, fuerza motriz del avance de la sociedad.

Los comunistas españoles, después de la disolución de la Confederación General del Trabajo Unitaria en diciembre de 1935, ingresamos en la Unión General de Trabajadores y a ella seguiríamos perteneciendo de no haber sido por una serie de vicisitudes —que no es el momento de hacer historia de ellas— de los difíciles años de la clandestinidad bajo la dictadura fascista, en primer lugar, por el anticomunismo rabioso de viejos dirigentes socialistas y, en segundo lugar, por la política liquidacionista de S. Carrillo y su grupo.

Ahora, como se sabe, se ha celebrado en Madrid, con autorización del Gobierno Arias Navarro, el XXX Congreso de la UGT, el cual tomó acuerdos que consideramos positivos.

El Comité Ejecutivo, basándose en los planteamientos programáticos de la política unitaria del PCOE, considera que es necesario seguir desarrollando el contenido de nuestra política sindical a la luz de los nuevos aspectos que está cobrando hoy el sindicalismo revolucionario español.

El Comité Ejecutivo parte de la tesis de que el PCOE debe estar allí donde están las masas trabajadoras.

La realidad es que la inmensa mayoría de los trabajadores no están organizados y sólo una pequeña minoría se encuentran bajo la influencia de organizaciones sindicales de orientación democrática.

De ahí que el Comité Ejecutivo recomiende a sus organizaciones y militantes trabajar en dos direcciones:

Primero, en las Asambleas de trabajadores, que hoy son una forma de organización democrática y efectiva para luchar por las reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores. Y allí donde no existan esas Asambleas es necesario fomentarlas, y

Segundo, en las organizaciones sindicales de orientación democrática —allí donde existan— que gocen de prestigio entre los trabajadores.

Tanto en las Asambleas de Trabajadores como en las organizaciones sindicales de orientación democrática, nuestros militantes deben colocarse en la primera línea de defensa de los intereses de los trabajadores y, al mismo tiempo, enarbolar siempre la bandera de la unidad de acción de la clase obrera y de la unidad sindical, así como luchar por la liquidación total del verticalismo corporativo, fascista.

A la vez, el Comité Ejecutivo aconseja seguir de cerca la actividad de la UGT, tanto en el plano nacional como en el local, observando cómo lucha en defensa de los intereses vitales de los trabajadores, qué soluciones promueve a los problemas fundamentales con que se encara la clase obrera y cuál es su autoridad real entre las masas laboriosas.

A partir de un examen objetivo de la experiencia recogida, el Comité Central podría tomar en un futuro próximo decisiones sobre el problema sindical en congruencia con la política unitaria del Partido.

LA LUCHA IDEOLOGICA Y SU IMPORTANCIA PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO

EN el gran movimiento de las masas trabajadoras en España se observa hoy un entrelazamiento entre las acciones espontáneas, alimentadas por el instinto de clase y el espíritu de rebeldía

frente a la opresión capitalista, y los aspectos conscientes y organizados de ésta y, sobre todo, una falta de sincronización de las acciones en el plano local, de industria y nacional. Ello priva a los trabajadores en huelga de la solidaridad de sus hermanos de clase y permite, a la vez, al Gobierno aplastar por partes el movimiento reivindicativo.

No se puede negar que ha habido acciones en las que se ha derrochado heroísmo y se han hecho grandes sacrificios, pero las masas trabajadoras no han podido alcanzar totalmente sus objetivos por falta de suficiente organización, solidaridad y claridad política.

Este es un fenómeno que tiene sus raíces en los cuarenta años de dictadura fascista, de presión ideológica sobre los trabajadores por parte del aparato propagandístico del Estado franquista, del prolongado periodo de clandestinidad de los partidos y grupos revolucionarios y de la progresiva proliferación del oportunismo y el reformismo.

Naturalmente que todo ello no ha podido despolitizar a las masas trabajadoras, pero es imposible que en unos pocos meses puedan superar por completo el peso de la influencia negativa que se ha ejercido sobre ellas durante decenios.

Precisamente una de las principales tareas del PCOE es ir cambiando la correlación entre lo espontáneo y lo consciente, en favor de un desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y, por consiguiente, de su organización.

La lucha ideológica que viene desplegando nuestro Partido desde que se deslindó del carrillismo se concentra en el esfuerzo por introducir el marxismo-leninismo en la conciencia de las masas trabajadoras, por combatir las manifestaciones más reaccionarias de la ideología burguesa y por desenmascarar la labor nefasta de las corrientes antimarxistas dentro del movimiento obrero, en particular el carrillismo, obstáculo principal para conseguir la unidad revolucionaria de las masas trabajadoras.

Para comprender mejor la importancia de la lucha que libra nuestro Partido contra el carrillismo, creemos es oportuno ahondar más aún en el examen de esa corriente antimarxista, que anida en el movimiento obrero español y actúa también en el movimiento comunista internacional.

Al mismo tiempo queremos responder a aquellos camaradas que preguntan si no es excesiva nuestra crítica al carrillismo y resta energías que deberían ser empleadas en otros frentes.

Nuestra crítica al carrillismo

TODOS los partidos y grupos que actúan en la escena política española y se presentan como marxistas han hecho y siguen haciendo una crítica acerba al carrillismo como corriente oportunista de derecha, que traiciona, en particular, los intereses inmediatos de los trabajadores y, en general, los de la revolución española. Es decir, apartando al pueblo trabajador de la senda luminosa del socialismo y tratando de hundirlo en el pantano del reformismo burgués.

Sin embargo asistimos a un fenómeno original. Algunos grupos ultraizquierdistas, de tendencias trotskista o maoísta, se han puesto a colaborar con el carrillismo, primero en la «Junta democrática» y ahora la «Coordinadora democrática».

Para comprender la actitud que asumen esos grupos frente al carrillismo es necesario tener en cuenta la trayectoria de su progenitor. La trayectoria de S. Carrillo —desde que nació en el seno del Partido Socialista como hombre político hasta su ascensión a dirigente del Partido Comunista— está marcada por un movimiento pendular de su pensamiento político, el cual oscila de ideas de corte trotskista a ideas revisionistas y oportunistas de derecha. Ese movimiento pendular sirvió a éste para adaptarse a todas las situaciones y coyunturas nacionales e internacionales, es decir, manifestando en todo momento un verdadero mimetismo político. El caso de S. Carrillo es un ejemplo palpable de cómo las posiciones de derecha son el reverso de las posiciones izquierdistas.

La trayectoria seguida por S. Carrillo sería comprendida a medias si no tuviéramos en cuenta los motivos profundos y ocultos que le han movido en su vida política, o sea, sus ambiciones de poder, el arrivismo y la deslealtad política con sus camaradas de lucha y con sus aliados. Fiel a la fórmula maquiavélica de que todos los medios son buenos para alcanzar un objetivo, S. Carrillo ha recurrido a todo género de procedimientos incompatibles con la ética comunista, con los principios leninistas del partido revolucionario de la clase obrera, llegando incluso al crimen político.

El contenido de nuestra lucha contra el carrillismo, desde que rompimos con él, está inspirado en una de las experiencias del marxismo-leninismo. En efecto, la lucha contra las corrientes antimarxistas dentro del movimiento obrero y comunista internacional, desde los tiempos de Marx y Engels hasta el presente, se ha desarrollado como una lucha ideológico-política de principios, independientemente de las características psicológicas y morales de los portadores de esas corrientes.

Sin negar la importancia de las características personales, el papel decisivo, determinante, lo juegan siempre las ideas, las concepciones que se llevan a la conciencia de las masas y que, en fin de cuentas, pueden materializarse en la conducta política de éstas. Por eso, cuando se trata de ideas y concepciones antimarxistas, la lucha contra ellas debe proseguir sin desmayo hasta su completa derrota, hasta su erradicación del movimiento obrero.

Quienes nos invitan hoy a cesar en la lucha ideológico-política contra el carrillismo y a no tomar muy en serio las altisonantes declaraciones antimarxistas de su progenitor, pues, en definitiva, se trata únicamente —según ellos— de maniobras para conseguir aliados en el campo de la burguesía y escalar las esferas del gobierno, apoyan consciente o inconscientemente el oportunismo y hacen un gran servicio a la burguesía. ¡Que Dios nos libre de atender esos consejos!

¿Podemos, acaso, ser indiferentes ante los esfuerzos del oportunismo carrillista por ganar la conciencia de las masas?

La respuesta es obvia. Veamos los jalones más destacados de la política oportunista de S. Carrillo y su grupo. La llamada política de «reconciliación nacional de los españoles», idea tomada de prestado del campo del reformismo burgués español y que pretende demostrar la posibilidad de conciliar los intereses contrapuestos de las clases explotadoras y explotadas. Hay que decir en honor a la verdad que la paternidad de esa política se la quiere atribuir Dolores Ibárruri, embalada en la pendiente del oportunismo carrillista.

La política de alianzas con sectores de la gran burguesía, con el Ejército franquista y la Iglesia católica para conseguir la democratización de España, basándose, al decir de S. Carrillo, que en España existe una «nueva burguesía» que gravita hacia la democracia, que el Ejército se mantendrá neutral en todas las contingencias de la democratización de España y que la Iglesia, como institución, aboga por el progreso social del país. En el fondo, esas alianzas por las que pugna S. Carrillo pretenden ganar la adhesión de las masas trabajadoras a las «reformas» auspiciadas por la monarquía, que dejan intactas las estructuras económicas y políticas heredadas del franquismo.

La fórmula de la «alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura» relega el papel de la clase obrera en el proceso revolucionario, en la lucha contra la dictadura del gran capital y por la instauración de la democracia en España.

La absolutización de la vía pacífica como la única y exclusiva para

conquistar la democracia y el socialismo desarma a los trabajadores frente a la violencia que ejerce hoy la monarquía.

La polivalencia del marxismo, partiendo de que a cada realidad nacional le debe corresponder una modalidad de la doctrina marxista. De hecho es la negación de esa teoría científica, con lo cual se priva a la clase obrera de una probada arma de lucha por su emancipación social.

El «socialismo con rostro humano», como antítesis del socialismo real y del valor permanente que tiene la experiencia de la construcción socialista en la Unión Soviética para todos los países del mundo capitalista.

Estos jalones, que son los más relevantes de la trayectoria política de S. Carrillo y su grupo, muestra que el partido carrillista rueda por una pendiente irreversible de carácter oportunista-revisionista de derecha. Ello le conduce en la etapa actual a una abierta colaboración de clases y, por ende, a convertirse en un partido de colaboración con la monarquía.

Acercas de lo que es el carrillismo y de su evolución se han expuesto las más variadas opiniones. Entre ellas hay una sobre la que nos vamos a detener para denunciar su falacia. Nos referimos a la afirmación de que el XX Congreso del PCUS fue un factor decisivo en la reorientación de la política del Partido Comunista de España.

Es notorio que esa versión ha reaparecido en toda una serie de publicaciones con motivo del vigésimo aniversario del XX Congreso del PCUS. Los ideólogos del revisionismo y del anticomunismo quieren hacer creer que el XX Congreso fue el acontecimiento que despertó en el movimiento comunista internacional una corriente «renovadora» que limpió los establos de Augias del marxismo-leninismo, sobre todo, en los problemas concernientes a la revolución socialista, a la edificación del socialismo, al papel del Partido y del Estado socialista.

Todo ello es una tergiversación. Las corrientes oportunistas latentes en aquel tiempo en el movimiento comunista, ante todo el de Europa Occidental, salieron a la superficie adulterando la crítica que el XX Congreso había hecho a los aspectos negativos de la actividad de J. Stalin, como secretario general del PCUS, silenciando el balance de los ingentes progresos conseguidos por la URSS en un periodo histórico extremadamente difícil, cuando existía el cerco capitalista y la amenaza de guerra contra el Primer Estado socialista y se había instaurado el fascismo en varios países de Europa. Ese balance se resumía en dos hechos transcendentales para la Huma-

nidad: la Unión Soviética derrotó al fascismo en la segunda guerra mundial y libró a los pueblos de la esclavitud nazi; la URSS se convirtió en un corto periodo de tiempo en una gran potencia, que hoy es garantía de la paz mundial y factor de progreso.

La verdad que desfiguran los oportunistas es que el pueblo soviético y el PCUS no pudieron apoyarse en ninguna experiencia para construir el socialismo y tuvieron que aprender en su propia práctica, no sólo en los éxitos, sino también en los fallos y reveses.

En la retrospectiva, una de las cosas que sirvió de asidero a los oportunistas y detractores del socialismo en la URSS fue, a nuestro juicio, la forma de narración empírica en que Jruchov expuso las conculcaciones de la legalidad soviética y de las normas de vida de Partido, en una situación de extremada complejidad en el interior del país y en el plano internacional.

En el caso del Partido Comunista de España, S. Carrillo ha ido mucho más lejos que los demás oportunistas europeos. Ha puesto en tela de juicio la propia naturaleza socialista del régimen existente en la Unión Soviética y ha fabricado un «modelo» de socialismo para España.

El objetivo que se esconde tras esas elucubraciones antimarxistas, antihistóricas, es hacer méritos ante la burguesía española para desbrozar el camino a pactos interclasistas, con los que se está colocando en los mecansimos políticos del capital monopolista español, auspiciados por la monarquía juancarlista.

Acerca de la dictadura del proletariado

El concepto marxista «dictadura del proletariado» está hoy en el centro de los grandes debates ideológicos en el movimiento comunista internacional. Sobre este concepto se vierten las más diversas opiniones. Entre ellas figuran unas que lo desvirtúan, otras que lo marginan como inservible para las condiciones del mundo capitalista actual, y las más que lo defienden.

Como enseñan los clásicos del marxismo y corrobora la historia, la «dictadura del proletariado» es el poder de los trabajadores, dirigido por la clase obrera, y que tiene por meta la edificación del socialismo. En su desarrollo, esta lucha de clases lleva inevitablemente a la instauración del poder estatal de la clase obrera y sus aliados. Es decir, un poder que defiende las conquistas de la revolución socialista, que estimula y organiza las fuerzas creadoras del pueblo y lleva a cabo hondas transformaciones materia-

les, sociales y espirituales de la sociedad en el periodo de transición del capitalismo al socialismo.

Los hechos confirman a cada paso que el tránsito del capitalismo está regido por leyes fundamentales, una de las cuales es la «dictadura del proletariado». Todos los países que han emprendido ese camino, lo mismo que aquéllos que lo emprenderán en el futuro, tendrán que atravesar por la fase de la «dictadura del proletariado». Lenin afirmó que «todas las naciones llegarán al socialismo, esto es inevitable, pero no llegarán exactamente igual, cada una aportará singularidad en una u otra forma de la democracia, en una u otra variedad de la dictadura del proletariado, en una u otra cadencia de las transformaciones socialistas de los diferentes aspectos de la vida social».

Por eso, rechazamos la tesis de la dirección del PC Francés que establece una distinción entre «poder político de la clase obrera y sus aliados» y «dictadura del proletariado», considerando esta última como una «condición necesaria para la Rusia del año 1917», pero completamente innecesaria para los países capitalistas desarrollados de nuestros días. Esta tesis es defendida también por otros partidos del movimiento comunista europeo, y S. Carrillo la ha tomado de prestado para sus fines propagandísticos. Como siempre, la versión carrillista no presenta ninguna originalidad.

Así, pues, en lugar de proyectar la lucha de los trabajadores hacia la «dictadura del proletariado», se propone a éstos combatir a los «monopolios económicos» y caminar por la vía pacífica, en los límites de la tradicional democracia burguesa, para llegar a la tierra de promisión, el «socialismo en la libertad».

Cabe preguntarse al respecto: ¿Es posible limitar el poder de los monopolios y expropiarlos después sin rebasar las fronteras de la democracia burguesa y exclusivamente por la vía pacífica?, ¿es que acaso los trabajadores, por muy grandes que sean su heroísmo y su sacrificio, podrán hacer frente a los embates de la reacción, que recurrirá a todos los medios, incluida la violencia armada, si no cuentan con un poderoso instrumento de poder como es la «dictadura del proletariado»? Nuestra respuesta es negativa.

En España y en otros países capitalistas, la vida social muestra que esto no es así. Pues para conquistar, a veces, una pequeña reivindicación económica los trabajadores tienen que pagar un elevado precio: prolongadas huelgas, plenas de penuria para ellos y sus familias; la pérdida del empleo, los choques violentos con las fuerzas represivas, la cárcel, y, en ocasiones, la muerte.

Por tanto, ¿se puede creer que órganos tan poderosos del Estado

burgués, como son el Ejército, la policía, los tribunales y el aparato burocrático, van a permanecer neutrales ante la expropiación de los explotadores por los trabajadores? Ello es pura ficción, puesto que los órganos del Estado burgués no están al servicio del pueblo, sino que son garantes de los intereses de las clases dominantes.

¿Se puede creer acaso que respetando la legalidad burguesa, establecida para defender los intereses de las clases dominantes, se pueden llevar a cabo hondas transformaciones económicas y políticas que afecten al poderío de los monopolios y apunten al socialismo?

La tragedia chilena es la respuesta más convincente a esta pregunta. Un proceso revolucionario que se proponga realizar transformaciones de carácter socialista no puede dejar intacta la legalidad burguesa, por el contrario, la tiene que romper y sustituirla por una legalidad revolucionaria, respaldada por los correspondientes órganos de poder, pues de lo contrario la revolución sucumbirá.

Por cuanto la reacción no cederá pacíficamente sus posiciones a los trabajadores, el poder revolucionario no tendrá más remedio que optar por la defensa más enérgica y consecuente de las conquistas del pueblo. Y a éste le asiste el derecho de responder con la violencia revolucionaria a la violencia de la reacción.

Entendemos que esta polémica entre los que niegan hoy la necesidad de la «dictadura del proletariado» para transformar el capitalismo en socialismo y los que sostenemos la vigencia de ese concepto fundamental del marxismo-leninismo, no es una discusión académica o sobre un futuro aún lejano. Es una cuestión de gran actualidad política, puesto que la lucha por la democracia en los países capitalistas tiene una alternativa: el avance hacia la meta socialista; o costreñirse al *statu quo*, es decir, encerrarse en los angostos límites que establece la dictadura de la burguesía, con la particularidad de que si los trabajadores intentan rebasarlos, surge inmediatamente la eventualidad de un golpe de Estado de la reacción para apuntalar su poder, mediante una dictadura militar o fascista.

Los comunistas españoles no debemos perder de vista que el uso del término dictadura, en un país que viene sufriendo durante cerca de cuarenta años una dictadura fascista, puede producir en determinados sectores de la sociedad un impacto psicológico negativo.

No es menos cierto que las masas trabajadoras pueden también no comprender en determinadas circunstancias el significado del

término dictadura y, por eso, el Partido tiene la obligación de saber cuándo y cómo emplearlo en su propaganda.

Ahora bien, respecto a la consigna «dictadura del proletariado» sólo el análisis del momento político y sus tendencias es lo que aconsejará al Partido cómo emplear esa consigna para movilizar a los trabajadores en la lucha por transformaciones revolucionarias, por el socialismo.

Como venimos explicando en nuestros documentos, en España la lucha por la democracia no está separada de la lucha por el socialismo. El objetivo prioritario de la lucha por la democracia en nuestro país es hoy liquidar las supervivencias de la dictadura franquista, establecer la República Democrática Popular y realizar transformaciones políticas y económicas de carácter antimonopolista que desbrocen el camino hacia el socialismo.

En torno al internacionalismo proletario

OTRO de los problemas que está también en el centro de los debates ideológicos en el movimiento comunista es el «internacionalismo proletario», principio fundamental del marxismo-leninismo.

La posición que nosotros defendemos en cuanto al «internacionalismo proletario» es harto conocida por haber sido expuesta reiteradas veces en nuestros documentos, pero vamos a insistir en ella por la actualidad que hoy cobra, a despecho de que se nos tilde de dogmáticos, «seguidistas» y revolucionarios que tienen parado el reloj, cosa que nos importa un bledo.

Consideramos el «internacionalismo proletario» como una ley del proceso revolucionario, ley que tiene una profunda raíz objetiva, a saber:

—por la similitud de la situación económica y política de la clase obrera y por sus condiciones comunes de lucha;

—por la situación en el sistema de producción capitalista y por sus relaciones con los medios de producción, los obreros de todos los países, independientemente de su nacionalidad, son iguales entre sí;

—por la comunidad de intereses, la clase obrera de todos los países capitalistas y nacionalistas, pese a la diferencia de sus reivindicaciones inmediatas y formas de lucha, tiene un mismo objetivo: su emancipación social;

—por el carácter internacional del dominio de la burguesía, el proletariado de los distintos países tiene un enemigo común: el frente internacional del capital.

Estimamos también que el auténtico internacionalismo, además de ser una concepción y una política, es una práctica social de gran envergadura. Por ello, lo principal en el «internacionalismo proletario» es la solidaridad concreta y efectiva de la clase obrera.

Recordando a Lenin, el «internacionalismo proletario» es hacer progresar el movimiento revolucionario en su propio país y, a la vez, respaldar ese mismo movimiento en todos los países sin excepción.

El «internacionalismo proletario» es, pues, un conjunto de vínculos ideológicos, políticos, éticos y de organización de los trabajadores. Entre otros, esos vínculos son la solidaridad revolucionaria del proletariado, la conjunción de intereses nacionales e internacionales de la clase obrera, la igualdad, la soberanía y la autodeterminación.

El «internacionalismo proletario» demanda de los partidos comunistas y obreros unidad de voluntad y de acción para rechazar los intentos diversionistas de la burguesía y del revisionismo por romper dichos vínculos, es decir, por dividir a los trabajadores, sirviéndose del lema «divide ul regnes».

Por último, el «internacionalismo proletario» presupone la cohesión de los partidos comunistas y obreros como factor de desarrollo del proceso revolucionario de la clase obrera y como base de voluntad y de acción de esos partidos.

Sin embargo, estas direcciones de partidos comunistas europeos en lugar de coadyuvar a la cohesión del movimiento comunista de nuestro continente y, por ende, de la clase obrera de los países capitalistas con la de los países socialistas, consideran periclitado el internacionalismo proletario.

Afirman que el «internacionalismo proletario», en su acepción clásica, lleva implícito el peligro del monolitismo, entendido como la anulación de la personalidad de cada partido comunista e, incluso, de la restricción de la soberanía nacional y estatal; peligro que entraña la posibilidad por parte de los partidos de los países socialistas —y en este caso apuntan abiertamente al PCUS— de violar el principio de la coexistencia pacífica y de inmiscuirse en los asuntos internos de otros partidos comunistas y obreros.

S. Carrillo, por su parte, declara que el «internacionalismo proletario es un residuo histórico destinado a desaparecer», que se necesita una «reestructuración del internacionalismo, fundado en una coordinación de nuestra acción con el resto del movimiento

obrero de Europa Occidental», pero que el internacionalismo no debe extenderse a los partidos de los países socialistas —que define como «Partidos-Estado»—, pues con ellos sólo «podemos seguir manteniendo contactos». Y siguiendo en esa orientación, S. Carrillo llega a la conclusión de que la autonomía de un partido es la verdadera expresión del internacionalismo.

No descubrimos ninguna América si decimos que de siempre el «internacionalismo proletario» ha sido la unión de la autonomía de cada partido con la solidaridad proletaria con los demás partidos que luchan por una misma causa común. Cualesquiera tergiversaciones que puedan producirse en el movimiento obrero y comunista no tienen nada que ver con la esencia revolucionaria de este gran principio de lucha de la clase obrera por la transformación del mundo.

El «internacionalismo proletario» no conculca el derecho de los partidos a resolver, tanto las cuestiones de su desarrollo interno como las de la política exterior. Oponer la autonomía e independencia de cada partido al internacionalismo proletario es, en el mejor de los casos, un contrasentido.

La coordinación de la lucha de los partidos comunistas y obreros por la democracia y el socialismo, contra el imperialismo, no merma la capacidad de decisión de cada partido en los problemas nacionales e internacionales. Al contrario, lo refuerza contando con el apoyo y la experiencia de los demás partidos.

A juicio del Comité Ejecutivo, en el movimiento comunista europeo no asistimos en realidad a una discusión creadora sobre el desarrollo de nuestra teoría científica a la luz de los fenómenos y procesos que hoy caracteriza a la sociedad capitalista moderna, lo que redundaría en beneficio de todos los partidos y contribuiría a impulsar el proceso revolucionario.

Las actitudes de una serie de direcciones de los partidos comunistas y obreros de la Europa de los monopolios, sobre todo el francés y el italiano, muestran que so pretexto de la defensa de la autonomía y la independencia de cada partido se está llevando a cabo una revisión de los postulados fundamentales de la teoría marxista-leninista y de los acuerdos principales de las Conferencias internacionales. Esta revisión gira en torno a la doctrina de la dictadura del proletariado, al principio del internacionalismo proletario, a las leyes universales de la revolución socialista, a la concepción leninista sobre las alianzas y los compromisos, al papel de la clase obrera y del partido marxista-leninista y otros.

Al mismo tiempo, en las publicaciones oficiales y declaraciones de esos partidos se observa una exacerbada crítica que parte del supuesto falso de la existencia de contradicciones entre las estructuras socialistas vigentes en la URSS y las deficiencias y fenómenos negativos que todavía no han sido erradicados de la sociedad soviética. Crítica que marcha pareja a un distanciamiento cada vez mayor de la Unión Soviética y del PCUS.

Una verdadera crítica constructiva, de base marxista, no debería cuestionar la esencia socialista de las estructuras que imperan en la Unión Soviética y otros países de la comunidad socialista, sino señalar audazmente las insuficiencias y los defectos en un espíritu de camaradería y ayuda mutua.

Pero lo paradójico estriba en que esa forma de crítica no es admitida por las direcciones de los partidos comunistas a que nos venimos refiriendo, pues en cuanto se señalan fallos y dejaciones en los principios del marxismo, en su propia política, esas direcciones ponen el grito en el cielo, considerándolas como injerencias en sus asuntos internos, como violaciones de su autonomía e independencia en cuanto partido político.

Es inadmisibles que con fines electorales o con objeto de conseguir o mantener alianzas con otras fuerzas no comunistas, las direcciones de dichos partidos difamen la política del Partido Comunista Portugués y del Partido Comunista de la Unión Soviética. S. Carrillo no les va a la zaga en ésta como en otras cuestiones. No hace mucho lanzó calumniosos ataques contra el partido portugués, en plena campaña electoral, afirmando públicamente que el culpable de los «éxitos» de la reacción es la política de los comunistas portugueses. Esos ataques coinciden con las declaraciones de W. Brandt, el cual ha dicho sin ambages que gracias a la ayuda de la socialdemocracia europea se ha podido bloquear al Partido Comunista de Portugal.

Por último, deseamos declarar que en el movimiento comunista internacional no existe ningún centro ni ningún partido dirigente como se esgrime en la propaganda de algunos partidos comunistas y obreros, lo que sí existen son partidos con mayor experiencia, con mayor autoridad, numéricamente más grandes, en condiciones más o menos difíciles, pero en realidad todos en pie de igualdad, de autonomía e independencia para trazar su política y desarrollar su actividad. Estas diferencias no se pueden borrar hoy ni se borrarán nunca.

Por ejemplo, ¿quién puede poner en duda que la responsabilidad del PCUS en la lucha de la Humanidad por la paz, por impe-

dir una nueva hecatombe mundial, sin precedentes en la historia universal, es mayor que las de los partidos comunistas de Francia, Italia e incluso de Yugoslavia? Hay cosas que las comprende el hombre más sencillo del último rincón del mundo: si el imperialismo no ha desatado una guerra termo-nuclear ha sido por el poder de contención de la Unión Soviética.

La política de paz y de coexistencia pacífica de la URSS y del PCUS han de ser respaldadas en primer lugar por todos los comunistas, y ello no tiene nada que ver con la autonomía y la independencia de cada partido. Ese es, precisamente, un deber que nos impone el internacionalismo proletario.

Ante la situación creada en el movimiento comunista de Europa Occidental, el PCOE manifiesta que continuará defendiendo los postulados marxistas-leninistas frente a las corrientes revisionistas que anidan en las direcciones de algunos partidos comunistas europeos.

EL PARTIDO Y SUS TAREAS¹

LA situación de España, que hemos intentado analizar a grandes rasgos a lo largo de nuestro informe, corrobora una vez más la necesidad de la presencia en la vida política española de un partido con una ideología marxista-leninista y una política revolucionaria que traduzcan las aspiraciones de los trabajadores y que estimulen a éstos en la lucha por una auténtica democracia apuntada al socialismo. Un partido que combata al reformismo y el oportunismo, tanto de derecha como de izquierda, y desenmascare las maniobras de la burguesía tendientes a integrar a la clase obrera en los mecanismos económicos y sociales del capitalismo monopolista de España. Un partido que se esfuerce en educar a las masas trabajadoras en el espíritu del internacionalismo proletario y que aprenda de ellas.

El Partido Comunista Obrero Español es, precisamente, un partido de ese tipo, que se encuentra en periodo de desarrollo, trata de ampliar y estrechar sus vínculos con la clase obrera y las masas trabajadoras, con los intelectuales y estudiantes demócratas.

1) De esta parte del informe, se publican solamente fragmentos.

Nuestro Partido tiene presente la enseñanza de Lenin de que un partido, por pequeño que sea, si tiene una política correcta puede llegar a transformarse en una gran organización, sobre todo si sabe ganarse la voluntad y la simpatía de la clase obrera, de las masas trabajadoras.

La historia del movimiento comunista español prueba fehacientemente ese aserto de Lenin. De un partido pequeño y con poca influencia en 1931, el Partido Comunista de España, bajo la dirección de José Díaz, se transformó en la primera fuerza política del país, gracias a su política revolucionaria y a su dirección cohesionada en torno a los principios del marxismo-leninismo. Hoy como entonces se abre en España una etapa revolucionaria, la clase obrera y todos los estamentos de la sociedad se ponen en movimiento. En esta situación el Partido Comunista Obrero Español recoge la bandera de la revolución española, abandonada por el grupo S. Carrillo-Dolores Ibárruri, y aspira a ocupar en nuestro país el lugar que le corresponde a un partido de tipo leninista.

Los camaradas en los que a veces cunde la desesperación y la impaciencia deben tener muy en cuenta esta lección de la historia.

El camino recorrido desde 1970 por nuestro Partido ha estado lleno de dificultades. Pero nuestras organizaciones y militantes han sabido hacerles frente y desbaratar los intentos de destruir al PCOE.

El Partido que entonces nos propusimos crear, es hoy una realidad, con la que tienen que contar hasta nuestros enemigos.

El desarrollo, la consolidación, la unidad y el prestigio adquiridos por el PCOE no nos hacen cerrar los ojos ante las dificultades que todavía hemos de salvar, y las debilidades que aún tenemos.

Entre las dificultades las fundamentales son las siguientes:

La primera...

La segunda reside en la falta de cuadros. Esta dificultad repercute en toda la vida del Partido. ¿Dónde sacarlos?... La cantera de nuestros futuros cuadros y dirigentes está en las fábricas, en las empresas, en el campo, en las universidades, etc. Para ello hay que desarrollar una política de cuadros más a tenor con las crecientes necesidades del Partido. Debemos ser audaces en la promoción de nuevos cuadros, perseverantes en la ayuda a éstos y pacientes en su formación ideológico-política.

La tercera reside en la falta de medios materiales. Uno de los procedimientos con los que se nos quiso y se nos quiere liquidar es la asfixia económica... Venimos haciendo grandes esfuerzos en este sentido, pero todavía es insuficiente en relación con las necesidades, siempre en aumento. Nos faltan medios materiales para organizar conferencias de prensa —como lo practican otros partidos—, multiplicar nuestras publicaciones y hacerlas más frecuentes. Por ejemplo, es deseo general que «Mundo Obrero» rojo salga quincenalmente... Hasta ahora hemos venido saliendo del paso gracias al espíritu de sacrificio de camaradas y organizaciones... Mas esto es insuficiente. Es necesario que cada miembro del Comité Central movilice a las organizaciones y militantes allí donde se encuentre para recaudar medios económicos destinados al Partido y recoger todas las iniciativas que surjan en esa dirección a fin de cumplir tan importante tarea. Esto no quiere decir que los miembros del Comité Central, las organizaciones del Partido y los militantes se transformen en vulgares «saca perras» o en «recaudadores de arbitrios», como es corriente en el partido carrillista. Pero deben comprender el significado político de la cuestión financiera para poder desarrollar su actividad.

El Comité Ejecutivo considera que ha de ponerse hoy más el acento en las debilidades que en los avances, para corregirlas y elevar el trabajo a niveles superiores.

La primera reside...

La segunda reside...

La tercera reside en la necesidad de engrosar nuestro Partido, de ampliar el número de comités provinciales, de crear comités regionales allí donde sea necesario, de multiplicar el número de células y de ensanchar los sectores de simpatizantes; en una palabra, acrecentar las filas del PCOE, especialmente con militantes de procedencia obrera y campesina.

La cuarta reside en la insuficiente colaboración de los miembros del Comité Central, de los Comités provinciales y militantes con «Mundo Obrero» rojo. Nuestro órgano central debe recoger los problemas más candentes de los trabajadores, sus reivindicaciones y luchas, sus experiencias y aspiraciones más sentidas; reflejar objetivamente el cuadro político nacional de cada momento y la situación de los trabajadores...

El Comité Ejecutivo desea destacar una cuestión a la que damos bastante importancia. Se trata de la llamada «reunificación de los comunistas españoles». Es archiconocida la posición del PCOE so-

bre esta cuestión, pero queremos insistir en ella a causa de las manipulaciones que se vienen haciendo últimamente en torno a esa «reunificación».

La unidad de los comunistas españoles sólo puede realizarse sobre una plataforma ideológica y política, cuyos puntos fundamentales son: el reconocimiento y la aplicación estricta de los principios del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario; el apoyo incondicional a la acción unida de la clase obrera española por la democracia y el socialismo, y la lucha intransigente contra el carrillismo y demás corrientes antimarxistas en el movimiento obrero y comunista.

La vida ha demostrado que de todos los partidos que hoy ostentan en nuestro país la sigla de «comunista», el Partido Comunista Obrero Español es el único que lleva a la práctica esos tres postulados. De ahí su derecho moral a ser el partido que puede satisfacer las nobles aspiraciones de todos aquellos comunistas españoles que quieren marchar por la senda de la revolución socialista.

Por consiguiente, las puertas del PCOE están abiertas para todos los comunistas, independientemente de que hayan militado o no en alguna organización.

Ante el fracaso de las tentativas de destruir al PCOE, ahora se recurre a una falaz maniobra, consistente en agitar, como un señuelo, la «reunificación de los comunistas» con argumentos tan inconsistentes como «la unidad por encima de todo», «unirnos sin cabecillas», «un Congreso arreglará los problemas», etc., etc. El verdadero objetivo de esa maniobra es liquidar a nuestro Partido y privar a la clase obrera española de una auténtica vanguardia marxista-leninista. Como las anteriores, esa tentativa está condenada al fracaso.

El Comité Ejecutivo exhorta a sus organizaciones y militantes a continuar vigilantes frente a toda clase de maniobras liquidacionistas de nuestros enemigos y a seguir trabajando entre los comunistas organizados o no organizados, para atraerlos a nuestras filas.

Sin embargo, el Comité Ejecutivo considera que el crecimiento del Partido ha de venir, fundamentalmente, de la labor de nuestras organizaciones y militantes entre los obreros, los campesinos, los empleados, los intelectuales, los estudiantes, entre la juventud y las mujeres.

De esas ingentes masas de trabajadores manuales e intelectuales vendrán al Partido en un futuro próximo millares de nuevos

miembros, entre los cuales destacarán nuevos dirigentes del PCOE.

El Comité Ejecutivo constata que la Federación de Jóvenes Comunistas de España, organización todavía modesta, no sólo proporciona una ayuda permanente al Partido, sino que es también cantera de nuevos militantes del PCOE.

La presencia de jóvenes que podéis ver en este Pleno del Comité Central es una muestra más de los progresos que hace la FJCE.

El Comité Ejecutivo llama la atención de todos los miembros del Comité Central para que refuercen el trabajo entre las mujeres en general, pero especialmente entre las jóvenes y les encomienden con más audacia tareas de responsabilidad, ayudándolas tanto en el cumplimiento de éstas como en su formación política e ideológica. En la situación que hoy vivimos podemos observar cómo la mujer se incorpora cada vez más a la vida política y social española. Es menester que todas nuestras organizaciones y militantes presten su concurso a la Unión de Mujeres Españolas en la realización de los fines que esta organización tiene.

Como información, el Comité Ejecutivo pone en vuestro conocimiento que el Congreso Extraordinario nombró un Comité Central de 51 miembros, eligiendo solamente 38 y encomendando al Comité Ejecutivo que fuera cooptando, según las necesidades, al resto de miembros...

Por último, el Comité Ejecutivo somete a la aprobación de los miembros del Comité Central la propuesta de celebrar el próximo año el Congreso del Partido. Según los Estatutos, los Congresos deben celebrarse cada cuatro años, y en 1977 se cumple ese plazo...

Cada miembro del Comité Central, cada organización y militante allí donde resida debe prepararse con entusiasmo para este gran acontecimiento de nuestro Partido.

Camaradas:

Este IV Pleno del Comité Central será un jalón de gran importancia en la vida de nuestro Partido, esperamos que de él salgan los acuerdos que hoy necesita el PCOE en la situación que atraviesa España. Confiamos en que el Pleno impulsará el desarrollo del Partido en el plano político, ideológico y orgánico. Al mismo tiempo, contribuirá a elevar el prestigio del PCOE a escala nacional e internacional y a estrechar sus vínculos con las masas trabajadoras y sectores democráticos de España.

Junio de 1976

47